

S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 49
O R D I N A R I A
LUNES 11 DE MAYO DE 2015

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cuarenta minutos del lunes once de mayo de dos mil quince, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Luis María Aguilar Morales, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Eduardo Medina Mora I., Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán.

Los señores Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Margarita Beatriz Luna Ramos no asistieron a la sesión, el primero por desempeñar una comisión de carácter oficial y la segunda previo aviso a la Presidencia.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número cuarenta y ocho ordinaria, celebrada el jueves siete de mayo del año en curso.

Por unanimidad de nueve votos, el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el lunes once de mayo de dos mil quince:

I. 1396/2011

Expediente varios 1396/2011, promovido por el señor Ministro Juan N. Silva Meza, en su carácter de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el proyecto formulado por el señor Ministro Alberto Pérez Dayán se propuso: *“PRIMERO. La participación del Poder Judicial de la Federación en la ejecución de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “Caso Rosendo Cantú y otra contra los Estados Unidos Mexicanos” y “Fernández Ortega y otros contra los Estados Unidos Mexicanos” se circunscribe a los términos precisados en la presente ejecutoria. SEGUNDO. Infórmese esta determinación al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al titular del Poder Ejecutivo Federal por conducto de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, para los efectos a que haya lugar.”*

El señor Ministro ponente Pérez Dayán realizó la presentación de la propuesta modificada de los considerandos noveno, décimo y décimo primero relativos, respectivamente, a la violencia sexual como tortura, a las personas indígenas y acceso a la tutela jurisdiccional y a las medidas administrativas derivadas de las sentencias de la Corte Interamericana en los casos Rosendo Cantú y Fernández Ortega que deberá implementar el Poder Judicial de la Federación. Preciso que el considerando noveno se

modificó para agregar y desarrollar diversos criterios emitidos por la Primera Sala respecto del tema de tortura, de los cuales se desprenden diversos principios y directrices que deben observar los jueces nacionales. Señaló que el considerando décimo también se modificó para añadir diversas tesis aisladas y jurisprudencias de la Primera Sala relativas al derecho humano de acceso a la tutela jurisdiccional con perspectiva de género, tomando en cuenta la vulnerabilidad de las personas indígenas, máxime cuando son menores de edad. Asimismo, modificó el considerando décimo primero para puntualizar que las medidas administrativas referidas no deben entenderse como cuestiones estáticas, sino que esta Suprema Corte adquiere el compromiso de seguir avanzando en la adecuada realización, implementación y eficiencia de las mismas, así como que se actualiza la información sobre el estado de los procesos penales de Rosendo Cantú y Fernández Ortega, esto es, que se encuentran en etapa de instrucción; finalmente, apuntó haber incorporado las tesis y observaciones remitidas por los señores Ministros Zaldívar Lelo de Larrea y Sánchez Cordero de García Villegas.

El señor Ministro Cossío Díaz expresó que, si bien se agregaron tesis aisladas y jurisprudencias sobre el criterio de la Primera Sala en relación con los temas de tortura y género, no se analiza críticamente su incorporación ni se relacionan sistemáticamente. Indicó que si bien en un expediente varios se pretende dar lineamientos para el cumplimiento de una sentencia internacional, lo consideró

insuficiente, pues se debe analizar la sentencia internacional para identificar de manera clara las acciones jurisdiccionales y administrativas que deberán tomarse por parte del Poder Judicial a efecto de lograr su cumplimiento. En cuanto a lo jurisdiccional, estimó que es necesario: 1) identificar los criterios materiales relacionados con los casos particulares contenidos en las sentencias que debieran instrumentarse por parte de los órganos jurisdiccionales, 2) en otros casos concretos, identificar los mecanismos, reasunciones, atracciones, envío o aplazamiento en la resolución de los casos temáticamente relacionados y 3) identificar la continuidad temática de las obligaciones específicas de control de convencionalidad o constitucionalidad contenidas en esas sentencias con las establecidas en las anteriores en las que el Estado Mexicano ha sido condenado, lo cual ha sido materia del diverso expediente varios 912/2010, en particular en cuanto al artículo 57 del Código de Justicia Militar, con independencia de las actuaciones de los demás Poderes al respecto. En lo administrativo, indicó ser necesario identificar las sanciones relativas al cumplimiento de las sentencias, las que no pueden limitarse al recuento de acciones ya realizadas, sino que deben contemplarse medidas de capacitación y sensibilización pues, de otro modo, no se da efectivamente una condición remedial vinculada con las sentencias internacionales, en su vertiente de reparación y no repetición. Por lo anterior, anunció voto en contra de la propuesta.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas consideró conveniente adicionar el proyecto, en el análisis de la denuncia de tortura, desde una perspectiva de género a partir del artículo 7, punto b, de la Convención Belém do Pará, el cual impone obligaciones reforzadas al Estado en cuanto al deber de debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia en contra de las mujeres, menores e indígenas, a fin de que los operadores jurídicos tengan certeza y claridad, no solamente ser descriptivos, pues pareciera que las incorporaciones realizadas por el señor Ministro ponente Pérez Dayán no se aterrizan a los casos concretos. Estimó importante establecer un estándar de valoración probatorio en casos de violencia sexual, puesto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual reconoce que la violación sexual ocurre en secreto, otorga valor preponderante al dicho de la víctima, cotejándolo con otros indicios para determinar la credibilidad y factibilidad de los hechos denunciados con base en factores contextuales y circunstanciales; estándar que debería consistir en: 1) entender la naturaleza de un hecho de violencia sexual que, por sus propias circunstancias, se requieren medios de prueba distintos de otras conductas, 2) otorgar un valor preponderante a la información testimonial de la víctima, dada la secrecía en que regularmente ocurren estas agresiones, lo cual limita la existencia de pruebas gráficas y documentales, 3) evaluar razonablemente las inconsistencias del relato de la víctima, de conformidad con la naturaleza traumática de los hechos, 4) ordenar y practicar

las pruebas que sean necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos, evitando la revictimización de la persona denunciante, 5) tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima como su edad, condición social o pertenencia a un grupo históricamente desaventajado, lo que permita establecer la factibilidad del hecho y su impacto, 6) valorar el material disponible, incluida la información testimonial de la víctima libre de estereotipos discriminatorios de género y 7) utilizar adecuadamente las pruebas circunstanciales, las presunciones y los indicios para extraer conclusiones consistente con los hechos.

Asimismo, consideró que se deben establecer lineamientos para cumplir el deber de investigación con perspectiva en materia de violencia sexual, lo cual exige que: 1) la declaración de la víctima se realice en un ambiente cómodo y seguro que le brinde seguridad y confianza, 2) la declaración de la víctima se registre de tal forma que se evite o limite la necesidad de su repetición, 3) se brinde atención médica, sanitaria y psicológica de la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias de la violación, 4) se realice un examen médico y psicológico completo y detallado mediante el personal idóneo y capacitado, en lo posible, del sexo que la víctima indique, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza, si así lo desea, 5) se documenten y coordinen los actos investigados y se maneje diligentemente la prueba, tomando muestras suficientes para determinar la

posible autoridad del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, la investigación inmediata del lugar de los hechos y garantizando en forma correcta la cadena de custodia y 6) se brinde asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas del proceso. Reiteró que el tema de la violencia contra las mujeres es de la mayor relevancia para el Estado Mexicano, por lo que el Poder Judicial de la Federación está obligado por la Constitución y por los tratados internacionales a prevenir y reparar esas conductas, por lo que en este expediente se deben establecer parámetros claros para que todos los operadores jurídicos los observen, derivados no sólo de la labor jurisdiccional de esta Suprema Corte, sino de la Corte Interamericana y de los instrumentos internacionales de los que México es parte. Reservó su derecho para, en su caso, realizar un voto concurrente o particular.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea sugirió incorporar las tesis recién emitidas por la Primera Sala, derivadas del amparo en revisión 554/2013, esto es, un caso de feminicidio, en las cuales se establecieron diversos lineamientos para juzgar con perspectiva de género y para entender la violencia contra la mujer como una forma de tortura, aclarando que, de aceptarse esta modificación, se podrían satisfacer muchas inquietudes externadas por la señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán, respecto de la participación del señor Ministro Cossío Díaz, recapituló que

el proyecto recogió criterios de la Primera Sala relacionados con la tortura como violencia sexual, violencia de género, no autoincriminación, indigenismo, defensa adecuada, derechos de la mujer y derechos de los niños, los cuales reseñan los avances que, en materia jurisdiccional, cumplen las sentencias internacionales de mérito, pero que no se podría hacer un análisis crítico de cada uno de esos criterios, dado que se orientaron en virtud de casos específicos del conocimiento de dicha Sala.

Modificó el proyecto para incorporar las directrices precisadas por la señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas en la medida en que coincidan con las tesis aisladas y las jurisprudencias de la Primera Sala que ya fueron agregadas, asimismo para añadir las tesis indicadas por el señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea, aprobadas por la Primera Sala el seis de mayo de dos mil quince, explicando que se encuentran pendientes de publicación en el Semanario Judicial de la Federación.

El señor Ministro Silva Meza hizo hincapié en que el expediente varios que se forma en razón del cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana es *sui generis*, pues determina el abordaje de las sentencias internacionales de condena para lograr su efectivo y cabal cumplimiento, como ocurrió con el expediente varios 912/2010 en el caso Radilla Pacheco. Apuntó que en el presente expediente varios se incursiona con formalidad, seriedad, acuciosidad y rigor el cumplimiento de las disposiciones nacionales e

internacionales con rigor académico y con propósito didáctico, en atención a la obligación del Poder Judicial de la Federación de ejercer un control de convencionalidad *ex officio*, siendo que, en la sentencias específicas, se aclara que la supresión expresa de las normas de derecho interno no garantiza los derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que se requiere el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagradas en dicho documento. Resaltó que en el proyecto se da cuenta de la evolución de ese desarrollo en el cumplimiento de las obligaciones en los temas específicos de violencia sexual como tortura, las personas indígenas, el acceso a la tutela jurisdiccional y las medidas administrativas por parte del Poder Judicial de la Federación, las que evaluó como un buen recuento como parte de un trabajo jurisprudencial en evolución de esta Suprema Corte, no obstante que hay observaciones que todavía se pueden hacer. En este sentido, se manifestó en favor de la propuesta.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea consultó si se votarían los apartados individual o conjuntamente.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán aclaró que indistintamente se podrían aprobar conjunta o separadamente.

El señor Ministro Medina Mora I. indicó que los expedientes varios son instrumentos de importancia por su sentido orientador de la acción de los juzgadores nacionales

con respecto de los temas que abarcan, siendo que, en el caso, se refleja, por un lado, el enorme esfuerzo realizado y, por el otro, las tareas pendientes. Precisó que el presente asunto no trata de resolver si se han cumplido o no las sentencias potestad de la Corte Interamericana, sino qué medidas deben adoptarse por el Estado Mexicano derivadas de esas sentencias. Sugirió que se revisara la incorporación de las tesis al proyecto, pues algunas no son atinentes al objetivo del expediente pues, por ejemplo, refieren a la persona del detenido y no a la persona de la víctima. Aclaró que la potestad como Tribunal Pleno se refiere al Poder Judicial de la Federación, no a todos los jueces nacionales, por lo que externó la duda concerniente a si puede obligar u orientar a todos los jueces mediante los protocolos de actuación que, a pesar de que son una contribución extraordinaria, no son instrumentos derivados de la resolución de casos y, caso contrario, al resolver una litis se genera jurisprudencia orientadora y obligatoria para los juzgadores, por lo que valdría la pena precisar la naturaleza de esos protocolos para hacerlos operativos para educar y motivar a los juzgadores a aplicar criterios de género, en aras de evitar que las conductas implicadas se repitan. Sobre esa base, se pronunció en favor del sentido del proyecto, estimando que en el engrose se pueden perfeccionar las tesis pertinentes para responder a la obligación internacional del Estado Mexicano, que además de ser jurídica es ética, moral y política.

El señor Ministro Pardo Rebolledo recordó que, conforme al precedente del expediente varios 912/2010, se determinó que el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana no se reduce a atender el punto de condena específico, sino a considerar obligatorias todas las consideraciones y términos de esas sentencias. En el caso concreto, las propias sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias y vinculatorias para todos los jueces mexicanos, como prevé la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 293/2011. Advirtió que algunas de las sugerencias que el señor Ministro ponente Pérez Dayán ha aceptado podrían implicar el abordaje de temas que no fueron tocados por la Corte Interamericana en sus sentencias ni han sido objeto de resolución por parte de esta Suprema Corte, por lo que, a reserva de ver el engrose, se apartaría de esas consideraciones porque se le daría a este expediente un alcance que no debería tener, además de que se establecerían criterios que no fueron motivo de un caso concreto de la competencia y resolución de este Tribunal Pleno o de la Corte Interamericana, a pesar de que la cita de todas esas tesis es en un afán informativo, es decir, de recolección de criterios relacionados con los temas relacionados con las sentencias internacionales.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea sugirió, para el considerando décimo, agregar un párrafo que explique que los criterios de la Primera Sala que se incorporan en materia de indígenas, a pesar de referirse al inculpado, son oportunas porque indican que se requiere tener un traductor

e intérprete que conozca la lengua y la cultura indígenas, lo que se podría aplicar para las víctimas en alguno de los procedimientos que se estudian. En cuanto al considerando décimo primero, sugirió modificar el rubro para incluir todas las medidas, no sólo administrativas, dado que también se contemplan algunas jurisdiccionales, por ejemplo, el garantizar que las averiguaciones previas respecto de los casos en cuestión se mantengan bajo conocimiento de la jurisdicción ordinaria.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán modificó el proyecto para excluir, tras su revisión, las tesis aisladas y jurisprudenciales que no se involucren de manera inmediata con las razones que generaron los fallos de la Corte Interamericana, en los términos sugeridos por los señores Ministros Medina Mora I. y Zaldívar Lelo de Larrea. Respecto de lo apuntado por el señor Ministro Pardo Rebolledo, aclaró que no se incorporaron los temas que, si bien son de una gran riqueza dialéctica, no han sido recogidos por motivo de un caso concreto ni reflexionado por vía jurisdiccional. En cuanto a las expresiones del señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea, concretó que, por una parte, el proyecto extiende el supuesto hipotético de los acusados contenidos en las tesis al caso de las víctimas y, por otra parte, indicó que las averiguaciones previas no son una medida administrativa, pues en ellas no participa directamente el Poder Judicial de la Federación, a pesar de que la Corte Interamericana lo atribuyó a dicho Poder, siendo que las averiguaciones

previas en su vertiente de persecución del delito es una política que pertenece al Poder Ejecutivo.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea aclaró que no se trata de la integración de las averiguaciones previas, sino de su consignación, momento en que entra la función jurisdiccional y, por ende, la obligación del Poder Judicial, por lo que reiteró la sugerencia de quitar el calificativo de “administrativas” al rubro del considerando décimo primero.

El señor Ministro Cossío Díaz adelantó que, con independencia de los ajustes en el proyecto, votaría en su contra, primeramente porque los protocolos de actuación no tienen carácter vinculante, pues así se definió por la Primera Sala; en segundo lugar, porque dar cuenta de todas las tesis relativas emitidas por la Primera y Segunda Salas, así como por el Tribunal Pleno, sin hacer una confronta con las sentencias de la Corte Interamericana, no resulta suficiente; en tercer lugar, porque muchos de esos criterios son tesis aisladas, sin carácter vinculante para los órganos del Estado Mexicano; finalmente, porque afirma que, al haberse reformado el artículo 57, fracción II, del Código de Justicia Militar, ya se cumplió en ese sentido, a pesar de que esto ya fue motivo de decisión en sesiones anteriores. Resaltó que la única manera de enfrentar el problema es como ocurrió en el expediente varios 912/2010, a saber, reasumiendo la competencia de asuntos para determinar lo que se hará en esa delicada materia.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán señaló que en la foja ochenta y nueve y siguientes del proyecto se resalta el valor y contenido de los protocolos de actuación que, si bien no son obligatorios, significan directrices y reflexiones importantes que comúnmente consideran los jueces en el desarrollo de sus procesos y el dictado de sus sentencias, resaltándose que ninguno de ellos se dictó en cumplimiento de estas sentencias internacionales, sino como resultado de otros casos con temas similares, resueltos por este Alto Tribunal.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales advirtió que durante la discusión de este asunto no se ha presentado oposición con la finalidad última: la protección de los derechos humanos en las distintas vertientes analizadas en este Tribunal Pleno, particularmente por lo que refiere a los temas de violencia sexual, tortura y trato a las personas indígenas para su acceso a la tutela judicial. Adelantó que votaría en favor del proyecto, con algunos probables comentarios en cuanto al valor de los protocolos de actuación y con las obligaciones directas impuestas por las sentencias de la Corte Interamericana que se analizan, expresando asimismo reservas en relación con el compromiso del Estado Mexicano más allá de las sentencias condenatorias, lo que guarda relación con la resolución del expediente varios 912/2010 y la contradicción de tesis 293/2011, lo que podría constituir un voto concurrente.

El señor Ministro Franco González Salas se manifestó esencialmente de acuerdo con el proyecto con las modificaciones aceptadas por el señor Ministro ponente Pérez Dayán, reservándose para que al tenor del engrose, en su caso, formular algún voto concurrente para hacer precisiones.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea aclaró que votará en favor de los considerandos noveno, décimo y décimo primero, reservándose el derecho para hacer voto concurrente una vez visto el engrose. Anunció voto en contra de los considerandos sexto, relativo a las obligaciones concretas que debe realizar el Poder Judicial, ya que pareciera que se supedita el cumplimiento de la sentencia condenatoria internacional de conformidad con los preceptos de la Constitución Mexicana; séptimo, relativo al control de convencionalidad *ex officio* en un modelo de control difuso de constitucionalidad, en razón de que no está de acuerdo en que los tribunales colegiados y los jueces federales no puedan inaplicar una norma de carácter general inconstitucional vía incidental en control concentrado; y octavo, relativo a la restricción interpretativa del fuero militar, únicamente por la falta de análisis del artículo 57 reformado del Código de Justicia Militar; respecto de estos tres considerandos se reservó su derecho de formular voto particular.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán recordó que se votó mayoritariamente una porción del considerando sexto y

que quedó encorchetada la segunda parte que contiene los tres incisos relativos a las obligaciones para el Poder Judicial como parte del Estado Mexicano, la cual se aprobaría automáticamente de aprobarse los considerandos subsecuentes.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del proyecto, de la cual derivaron los siguientes resultados:

Se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto de los considerandos noveno, décimo y décimo primero relativos, respectivamente, a la violencia sexual como tortura, a las personas indígenas y acceso a la tutela jurisdiccional y a las medidas derivadas de las sentencias de la Corte Interamericana en los casos Rosendo Cantú y Fernández Ortega que deberá implementar el Poder Judicial de la Federación. El señor Ministro Cossío Díaz votó en contra y anunció voto particular. Los señores Ministros Zaldívar Lelo de Larrea y Presidente Aguilar Morales anunciaron sendos votos concurrentes. Los señores Ministros Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Medina Mora I. y Sánchez Cordero de García Villegas reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes.

Por otra parte, respecto de los incisos que quedaron encorchetados de la segunda parte del considerando sexto, se aprobaron por mayoría de Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. Los señores Ministros Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea, Silva Meza y Sánchez Cordero de García Villegas votaron en contra y anunciaron sendos votos particulares.

Por instrucciones del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el secretario general de acuerdos dio lectura a los puntos resolutivos que regirán el presente asunto, de la siguiente forma:

“PRIMERO. La participación del Poder Judicial de la Federación en la ejecución de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “Caso Rosendo Cantú y otra contra los Estados Unidos Mexicanos” y “Fernández Ortega y otros contra los Estados Unidos Mexicanos” se circunscribe a los términos precisados en la presente ejecutoria. SEGUNDO. Infórmese esta determinación al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al titular del Poder Ejecutivo Federal por conducto de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, para los efectos a que haya lugar y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido. TERCERO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la congruencia formal de los puntos resolutivos, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

Acto seguido, el señor Ministro Presidente Aguilar Morales pronunció las siguientes palabras:

“No me queda duda que todos, sin excepción, —los que estamos en este Tribunal Constitucional— tenemos la vocación, el propósito, como finalidad de nuestra labor la protección de los derechos humanos, —algo que yo anticipaba hace un momento durante la sesión— que antes se englobaba bajo el concepto de garantías individuales; ese es el fin que nos convoca a debatir y resolver los asuntos que se ponen a nuestra consideración.

Por eso, me parece que sostener que existe una división en dos grupos de Ministros, además de que —en mi opinión— es absolutamente falsa, no es más que intentar hacer un infantil ejercicio maniqueo, quizá de utilidad mediática, pero alejado totalmente de la verdad.

La verdad —para mí— es que desde distintos argumentos jurídicos sustentados en posturas relativamente

diferentes se busca por todos y cada uno de los integrantes de este Tribunal Constitucional la protección de los derechos humanos y el máximo respeto a la persona humana; lo demuestran las resoluciones que tomamos constantemente, como a la que hoy hemos arribado.

Lo cierto es que nuestro compromiso por la protección de los derechos humanos nos lleva a lograr el mismo resultado, no hay dos grupos de Ministros mas que en la imaginación de a quienes les resulta fácil y útil para la crítica y con ello lograr notoriedad.

Que yo recuerde, ninguno de los reconocimientos que le han sido otorgados a este Tribunal Constitucional se refiere al método usado por sus miembros para llegar a tomar una resolución, sino que esos reconocimientos se otorgan por alcanzar el objetivo: la protección de los derechos humanos; ni se obtienen por el trabajo individual de alguno o de algunos de sus miembros sino por el resultado integral del Tribunal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, es cierto, está integrada por juristas con diferentes modos de entender las cosas, pero esa es —para mí— la riqueza de un órgano colegiado diverso y deliberativo que persigue y trabaja por un mismo objetivo: la protección de los derechos humanos.”

Acto continuo, levantó la sesión a las doce horas con cincuenta minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Pleno para acudir a la próxima sesión pública

ordinaria que se celebrará el martes doce de mayo de dos mil quince, a las once horas.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.

"En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos".